

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 10º Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-3416-2023  
**CARATULADO** : PAVEZ/FISCO DE CHILE (C.D.E)

**Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro**

**Vistos:**

A folio 1 y rectificadora a folio 6, compareció Salomón de Jesús Pávez Llanca, pensionado, representado judicialmente por Eduardo Armando García Ramos y Nicolás Alberto Leal Sepúlveda, todos domiciliados en calle Bandera N°236 subterráneo, comuna de Santiago, quien dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, en contra de Fisco de Chile, representada legalmente por Raúl Letelier Wartenberg, abogado, todos domiciliados en calle Agustinas N°1225, piso 4, comuna de Santiago, solicitando se condene a la demandada a pagar la suma de \$200.000.000.- a Salomón de Jesús Pávez Llanca, por concepto de daño moral, o a la suma que en derecho estime este Tribunal, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y además las costas de la causa.

Principió por hacer presente que el demandante se encuentra calificado como víctima en el listado elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, con el número 18.436.

Posteriormente procedieron expuso el relato del señor Pávez Llanca, quien sostuvo que actualmente tiene 72 años y vive en la comuna de Placilla.

Indicó que en 1973 su vida cambió drásticamente. En esa época vivía con su cónyuge y su hija, dedicándose al trabajo agrícola, hacia podas, cosechas, entre otras cosas. Narró que un día de octubre habiendo finalizado su jornada laboral y mientras volvía a su casa, al llegar ve que carabineros están esperando afuera y al identificarlo lo toman



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YNEKXRBQUJ

violentamente. Adujo que fue llevado a la prefectura Colchagua, y luego durante la noche lo trasladaron al mesón de interrogatorio, en donde le preguntaban por otras personas, las cuales les respondió que no conocía. En ese momento señaló que lo comenzaron a golpear, recibiendo patadas, golpes de puño, aplicación de corriente en sus testículos, orejas, nariz y lengua. También refirió que fue amenazado de muerte y sometido a un simulacro de fusilamiento. Le tiraban gases ácidos y en sus dedos le enterraban agujas. Indicó que todo esto le generó un dolor y desesperación indescriptible.

Continuó relatando que luego fue llevado a un cuartel de investigaciones, en donde volvió a ser golpeado y torturado, igualmente se le aplicó corriente y fue nuevamente amenazado de muerte.

Agregó que en estos lugares padeció de hambre, frío y sed. Lo mantuvieron en condiciones insalubres, junto a otros detenidos; incluso tenían que beber su propia orina para poder sobrevivir, añadiendo que igualmente comenzó a sufrir de desorientación, debido a lo débil que se encontraba. Tenía dolor en su columna y su visión era borrosa. Luego de permanecer 5 días privado de libertad lo llevaron a calle España en donde le sacaron la venda que tuvo todo el tiempo de detención sobre sus ojos.

Narró que posteriormente volvió a su hogar, aunque se encontraba mal tanto física como psicológicamente. Añadió que fue al doctor, tenía sus testículos muy inflamados, no podía orinar bien, su cuerpo estaba lleno de hematomas y se le produjo una hernia en la columna.

Mencionó que no pudo volver a trabajar por un tiempo, sufría pesadillas, pasaba noches enteras en vela. Siempre estaba angustiado, estaba pendiente de lo que pasaba alrededor suyo, subrayando que Carabineros lo controlaba constantemente, lo que lo tenía psicológicamente presionado, pues temía volver a ser detenido.

Finalizó el relato de los hechos anotando que hasta el día de hoy tiene secuelas, como por ejemplo problemas de sueño y físicamente ha presentado problemas en la próstata, tiroides y espalda haciendo presente que siente un gran dolor y tristeza, pues incluso personas cercanas a él han sido dañadas igual o hasta más que él.



En cuanto a los argumentos de derecho expuso que los hechos relatados por el actor se encuadran en crímenes de lesa humanidad de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

Luego refirió que la responsabilidad del Estado emana del artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, precepto que consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica. Así lo ha razonado la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N°3.354-03.

Agregó además que, para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, resulta necesario remitirse al Capítulo I de la Constitución Política de La República, donde se desarrollan principios basales desde donde se erige todo el sistema institucional del Estado.

Indicó que en este sentido el inciso 4° del artículo primero y el inciso segundo del artículo quinto, resumen en forma completa la doctrina del constitucionalismo, es decir, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. Señala que esto, sumado a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforme al denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que como se evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Ahora, en la esfera de la responsabilidad estatal en el derecho internacional, explicó que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones internacionales, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea



General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Indica que este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal y en materia de derechos humanos los estados tienen una obligación de resultado, esto es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Señaló que así la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce cuando el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. Así es una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado.

Sostuvo que la responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Adujo que esta interpretación tiene una confirmación normativa encabezada del artículo 19 y 5 inciso segundo de la Constitución Política de La República.

Posteriormente se refirió a la improcedencia de la aplicación de las normas de derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por



delitos de lesa humanidad, indicando que estos estatutos difieren en cuando a las premisas y principios diferentes a los que informan al derecho público y el derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo un error lógico y de sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Expresa que entre los sistemas de responsabilidad existen evidentes diferencias que hacen inadecuado extender por vía de analogía ciertos conceptos del derecho civil para resolver conflictos que versen sobre violaciones a los derechos humanos, criterio que ha sido expuesto en este mismo sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en el mismo sentido ha fallado la Corte de Apelaciones de Santiago.

Continúo exponiendo que las razones para que se considerara insuficiente el derecho de daños del Código Civil chileno son las siguientes:

- 1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada nos parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado –cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del Art. 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste –“secuestro calificado”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y
- 2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Demás está decir que la regla del Art. 2322 -sobre la relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando han



cometido crímenes de lesa humanidad, más aún es contraria al derecho internacional pues permite la exculpación estatal ante tan horrendos crímenes.

Siguiendo la línea del considerando precedente adujo que la acción de autos es imprescriptible por cuanto la presenta causa se encuentra gobernada por las normas de carácter público e internacional, lo que implica el reconocimiento de la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Explicó que si bien ninguna disposición de la Convención Americana señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la falta de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se establece en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia.

Expresó que por lo anterior resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. Por lo tanto, el Estado de Chile, en su calidad de estado miembro del sistema interamericano la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derechos humanos de alguna persona tendría que ser la misma, esto es, reparar íntegramente el mal causado.

Indicó que concordante con el razonamiento anterior, concluye que asimismo en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario el Art. 3 de Convenio IV de La Haya relativo a las “Leyes y costumbres de la guerra terrestre” (de 1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una indemnización en caso de violación de sus normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra y 55, que versa sobre protección de las personas civiles



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YNEKXRBQUJ

en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Así también cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. Señala que en este mismo orden de ideas nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005. Para finalizar expone que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61º Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee –en el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción- que: “La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.”

Luego procedió a citar jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Posteriormente señaló que se ha fallado reiteradamente por la Corte Suprema, para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado, no es necesario de acreditación del elemento subjetivo, pues dicho elemento no puede encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado.

En cuanto al daño, expuso que actualmente no se puede negar la procedencia de la indemnización del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrándose aquella incluso su fundamento en la propia



Carta Fundamental, específicamente en su artículo 6. Además, al no excluir la constitución el daño moral salvo en el supuesto de expropiación de acuerdo al artículo 19 N°24.

Respecto a la causalidad explicó que esta se encuentra fehacientemente acreditada, tanto así que el propio demandado ha reconocido la calidad de torturado de su representado, pues aparece en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura con el número 2828.

Continuo su demanda exponiendo que existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusto e ilegítima que vivió en carne propia. Explica que ha de entenderse por daño moral, aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Luego cita doctrina y jurisprudencia nacional que definen el daño moral en este mismo sentido.

Postuló que es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) “resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento”

Manifestó que aun así es difícil fijar un monto a fin de que logre hacer las veces de reparación integral del mal causado, porque es un daño verdaderamente irreparable al que como imaginará destruyó la vida tanto en lo personal como en lo íntimo, en cuanto a sueños y esperanzas, así como en el dolor tanto físico como psicológico. No obstante, ante la necesidad de fijar un monto, propone la cantidad de \$200.000.000.-.





A folio 9, consta notificación practicada a la parte demandada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 11, compareció Ernestina Ruth Israel López, abogada, en calidad de procuradora fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, contestando la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.

Refirió a las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que tanto la Ley N° 19.234 como la Ley N° 19.992 han concedido a sus beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país el que se accede concurriendo la persona al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la oficina del PRAIS.

Añadió que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo, adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también se obtiene el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y la promoción del resto de los derechos humanos.

Arguyó que además se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física con la finalidad de superar las lesiones físicas derivadas de la prisión política o tortura, así como también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuación gratuita de los estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo menciona el caso en que un hijo o nieto de un beneficiario, siempre y cuando este último no hubiera hecho uso de este derecho, puede postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Milla, Nuevo Milenio o las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que los reglamentos



tengan para esas becas. Por último se entregaron beneficios en vivienda a través del acceso a subsidios.

Adujo que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hizo presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de derechos humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio, el que ha sido reiterado y ratificado en el tiempo.

Expresó que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estado por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo, el Alto Comisionado para los Derechos



Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades.

Mencionó el documento denominado Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos en el que se ha expresado los programas de reparación, reconociéndose en el mismo la existencia de la problemática de exigir indemnización vía de programas de reparación y en forma paralela, el ejercer una acción civil judicialmente.

A su vez sostuvo que una vez que el gobierno ha hecho esfuerzo de buena fe en crear un sistema administrativo que facilite la entrega de beneficios a las víctimas, y permitir a los mismos iniciar litigios en su contra originaría el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, además de poner en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que el segundo sistema no es fácilmente evitable, toda vez que los Tribunales podrían sobrepasar fácilmente los beneficios en relación a los entregados en un programa masivo, lo que podría generar una sensación de desilusión y un cambio de expectativas con los programas administrativos. En este mismo sentido, arguye que precisamente se busca el rechazo de nuevas peticiones de indemnización lo que conlleva a un fortalecimiento de los programas de justicia transicional, ya que de no ser así implicaría un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa referente a ello.

Concluyó en que la acción deducida se funda en idénticos hechos pretendiéndose una indemnización por los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, por lo que opone la excepción de reparación satisfactiva por ya haber sido indemnizados el demandante.

Opuso además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que de acuerdo a lo relatado por el actor fue detenido entre el 23 y el 27 de diciembre del año 1984, siendo sometido a apremios ilegítimos y tortura en el marco del régimen dictatorial que regía en ese momento. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido



en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone la excepción de prescripción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechaza íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explicó las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo, indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que, en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostuvo que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación



del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguno de ellos se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifestó que, en relación al daño e indemnización pedida, señaló que es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de la ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que han resuelto bajo ese argumento.

Adujo que, en subsidio de anterior, su parte alega que, respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, cuyo objetivo también



es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo, señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finalizó haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

A folio 14, compareció el apoderado de la parte demandante, evacuando en tiempo y forma el trámite de réplica exponiendo que del examen de las defensas de su contraria se advierte que los hechos fundantes de la demanda no se cuestionan ni controvierten, tampoco se pone en entredicho el daño padecido tanto física como psicológicamente.

No obstante lo anterior realizó ciertas consideraciones a las excepciones de reparación integral y de prescripción, indicando en el caso de la primera que el deber de reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad, no se satisface con medidas genéricas dispuestas por el legislador, muy por el contrario las pensiones de reparación no son incompatibles con cualquier otra de cualquier, de que goce o pudiese corresponder al beneficiario, por lo que no es procedente considerar que ellas se otorgaron para reparar todo el daño moral sufrido por las víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos. Luego reitera que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del Consejo de Defensa del Estado quedarían



inaplicadas. Añadió que por otra parte, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Así las cosas, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

En la misma línea de lo anterior adujo que debe concluirse que los medios que voluntariamente el Estado ha dispuesto para reparar a las víctimas, no importan en forma alguna una renuncia o prohibición por parte de estas a la posibilidad de acceder a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios autorizados por la ley, declare la procedencia de reparación por daño moral. Así los beneficios otorgados por la Ley N° 19.992 y Ley N° 20874, no pueden desplazar a la indemnización del daño moral sufrido por el actor, lo que se desprende tanto de la historia de la ley como de las características de los beneficios por ella otorgada, que no constituyen una compensación íntegra de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, sino solo parte de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan suspenso a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Luego respecto de excepción de prescripción extintiva, indicó que, si bien existió un debate dogmático al respecto, s en los últimos años este se ha decantado en favor de la imprescriptibilidad de las acciones que emanan de crímenes de lesa humanidad. Explica que la defensa fiscal intenta aplicar las normas del título XXXV del Libro IV del Código Civil y las reglas referidas



a la prescripción extintiva lo que resulta absolutamente impertinente, además de mostrar que el Estado chileno actúa con un doble rasero, afirmando urbi et orbi que las acciones reparatorias son imprescriptibles, y por otro lado, afirmando a nivel doméstico la vigencia de reglas pretéritas y no pensadas para crímenes de Derecho internacional; siendo indiscutible la existencia de responsabilidad del Estado, por hechos gravísimos que ninguna persona tiene obligación soportar. En un Estado constitucional de Derecho el principio de responsabilidad es parte de la esencia del mismo. Expone que igualmente la jurisprudencia nacional ha compartido el criterio de la imprescriptibilidad las acciones civiles o reparatorias que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización, lo cual es hoy un hecho público y notorio que puede verse semanalmente en la sección de noticias del sitio web del Poder Judicial.

Respecto a los montos demandados, indicó que las normas procesales vigentes exigen que en la demanda se presenten peticiones concretas, que en este caso si bien resulta difícil avaluar atendido a que no hay cantidad alguna de dinero que pueda suplir el dolor que experimento el actor, se ve obligado a avaluarlo, independientemente que queda en manos del Tribunal determinar conforme a derecho y al mérito de autos. En cuanto a la reajustabilidad, indica que esta se encuentra ligada con la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones. La desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como es el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

A folio 16, compareció la demandada evacuando el trámite de dúplica mediante la cual ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que dan por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reiteró que en lo tocante a la excepción de reparación satisfactiva respecto al daño moral, este ya ha sido indemnizado, por lo que es procedente lo alegado atendido que el Estado de Chile ha empleado un enorme esfuerzo para reparar el daño producido a las víctimas, ya sea a través de transferencias de dineros, reparaciones simbólicas, etc.





Respecto de la prescripción de la acción deducida, insistió en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribo en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resultado bajo ese argumento.

A folio 17, se recibió la causa a prueba fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales esta habría de recaer, rindiéndose la que obra en autos.

A folio 33, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **Considerando:**

**Primero:** Que, a folio 1, compareció Salomón de Jesús Pávez Llanca quien interpuso demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad del Estado, en contra del Fisco de Chile, solicitando se le condene a pagar por concepto de indemnización de perjuicios la suma de \$200.000.000.-, más intereses y reajustes correspondientes, en razón de los argumentos de hecho y derecho que fueron previamente resumidos en esta sentencia.

En la réplica, reiteró los argumentos expuestos en su demanda, en virtud de lo ya señalado en lo expositivo.

**Segundo:** Que por su parte la demandada contestó la demanda oponiendo las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva, y solicitando su completo rechazo, con expresa condenación en costas, conforme a los fundamentos ya expuestos.

En la dúplica, ratificó el tenor de lo consignado en su escrito de defensa y aprovechó de recordar que los beneficios otorgados por el Estado constituyen una reparación suficiente y adecuada en el contexto de justicia



transicional, insistiendo además en la procedencia de la prescripción, lo que se da por reproducido.

**Tercero:** Que, del análisis de los escritos principales de las partes, y considerando que la demandada no controvertió de manera substancial y pertinente los hechos afirmados en la demanda según exige el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, centrando en cambio su defensa en las excepciones opuestas y en el monto de la indemnización pretendida, se pueden establecer como hechos no discutidos, los siguientes:

1. Que en octubre de 1973, el actor, Salomón de Jesús Pávez Llanca, quien a la época se dedicaba al trabajo agrícola y vivía con su cónyuge e hija, fue detenido violentamente en su domicilio por funcionarios de Carabineros, sin expresión de causa.
2. Que el actor fue conducido a la Prefectura Colchagua, donde durante la noche fue sometido a interrogatorio, siendo objeto de diversos apremios ilegítimos consistentes en golpes de pies y puños, aplicación de corriente eléctrica en testículos, orejas, nariz y lengua, gases ácidos, inserción de agujas en sus dedos, amenazas de muerte y simulacro de fusilamiento.
3. Que posteriormente fue trasladado a un cuartel de investigaciones, donde nuevamente fue golpeado, torturado y amenazado de muerte, permaneciendo en condiciones insalubres, padeciendo hambre, frío y sed durante su detención, que se extendió por un total de 5 días.
4. Que producto de estos hechos, el actor sufrió daños físicos inmediatos consistentes en inflamación testicular, problemas para orinar, hematomas generalizados y una hernia en la columna, así como secuelas psicológicas que persisten hasta la actualidad.
5. Que el actor fue calificado como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, siendo incluido en el listado oficial bajo el número 18.436.
6. Que el actor ha recibido y continúa recibiendo pensiones y beneficios en virtud de lo dispuesto en las leyes N°19.123 y 19.992, en razón de su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período que va desde el año 1973 al 1990.



**Cuarto:** Que, con fecha 13 de octubre de 2023, a folio 17, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que allí se señalaron.

**Quinto:** Que, con objeto de acreditar los fundamentos de sus alegaciones la parte demandante produjo prueba instrumental, consistente en:

**A folio 1:** 1) Nomina de personas reconocidas como víctimas, emitida por la Comisión nacional sobre Prisión Política y Tortura. Reiterado en folio 20.

**A folio 20:** 2) Sentencia de reemplazo en causa rol N°5831-13, pronunciada en Santiago el 10 de junio de 2014 por la Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema; 3) Sentencia en causa rol N°2918-13, pronunciada en Santiago el 6 de enero de 2014 por la Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema; 4) Sentencia en causa rol N°22.856-15, pronunciada en Santiago el 29 de diciembre de 2015 por la Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema; 5) Sentencia caso Órdenes Guerra y Otros Vs. Chile pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de noviembre de 2018; 6) Sentencia en causa rol N°1092-15, pronunciada en Santiago el 14 de septiembre de 2015 por la Segunda Sala de la Excelentísima Corte Suprema; 7) Informe de la comisión nacional sobre prisión política y tortura; 8) Capítulo V: Métodos de tortura: definiciones y testimonios del Informe-Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

**A folio 22:** 9) Nomina técnica para la atención de en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973 – 1990; 10) Carpeta de antecedentes respecto de Salomón de Jesús Pávez Llanca, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; 11) Informe psicológico respecto de Salomón de Jesús, elaborado el 17 de octubre de 2023 por el psicólogo Felipe Ignacio Elgueta Casanova; 12) Certificado de título profesional respecto de Felipe Ignacio Elguta Casanova, emitido el 17 de mayo de 2023 por la Universidad Autónoma de Chile.

Asimismo, se valió de prueba testimonial, oportunidad en la cual, según consta a folio 31, compareció el testigo Felipe Ignacio Elgueta Casanova, quien previamente juramentado declaró ante la receptora judicial



Ximena Aida Toledo Filippi en el siguiente tenor: En lo relativo al primer punto de prueba indicó que los hechos versan sobre la detención del señor Pávez en su domicilio, así como de la época en que estuvo en reclusión en los cuales experimento violencia. Lo que le consta por la lectura de documentos que le fueron proporcionados por el propio señor Pávez.

Sobre el segundo punto de prueba sostuvo que existe causalidad entre la acción dolosa y el daño de carácter psicológico padecido por el demandante, a quien el evaluó, daños que le han privado de poder realizar una rutina de manera efectiva.

Respecto al tercer punto de prueba afirmó que el demandante sufrió daños, los que ocurrieron durante el periodo de su detención. Refirió especialmente que este sufre de un trastorno de estrés postraumático que ha permanecido a través de sus ciclos vitales. Indicó que esto se manifiesta a través de síntomas como pensamientos intrusivos angustiosos recurrentes sobre la época que le tocó vivir, temor generalizado a realizar actividades fuera del hogar, problemas de sueño relacionados a dificultades para conciliarlo y despertares repentinos producto de pesadillas, estados de irritabilidad sin motivo aparente que explica la magnitud del estado emocional. Respecto al monto de estos daños, indicó que es difícil estimar el coste del tratamiento psicoterapéutico ya que el mismo podría extenderse a través del tipo de atención de salud mental necesaria por el evaluado en conjunto a la posibilidad de incurrir en tratamiento farmacológico para la disminución de los síntomas de mayor gravedad. Señaló que todo lo afirmado le consta por haber realizado la evaluación clínica al demandante. Repreguntado sobre la autoría del informe rolante en folio 22 reconoció la misma.

**Sexto:** Que, por su parte la demandada para acreditar los fundamentos de su defensa solicitó en el primer otrosí de su escrito de contestación rolante en folio 11, se oficiara al Instituto de Previsional Social para que informará sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido el demandante Salomón De Jesús Pávez Llanca, especialmente en relación con las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, oficio que consta evacuado por el Instituto de Previsión Social en folio 18.



**Séptimo:** Que, conforme arroja la prueba aportada por las partes, es posible dar por establecidos los siguientes hechos:

1.- Que el demandante presenta secuelas psicológicas permanentes que se manifiestan en un trastorno de estrés postraumático, caracterizado por pensamientos intrusivos angustiosos recurrentes, temor generalizado a realizar actividades fuera del hogar, problemas de sueño con dificultades para conciliarlo, despertares repentinos producto de pesadillas y estados de irritabilidad sin motivo aparente.

Lo anterior se acredita mediante el informe psicológico elaborado por Felipe Ignacio Elgueta Casanova y su posterior ratificación testimonial, antecedentes que en su conjunto permiten establecer una presunción grave, precisa y concordante sobre la existencia y entidad de estas secuelas.

2.- Que, el demandado paga al señor Salomón de Jesús Pávez Llanca beneficios de reparación conforme a las disposiciones de las leyes números 19.234, 19.992, 20.134 y 20.974, en su calidad de Víctima de Prisión Política y Tortura, habiendo percibido al 19 de octubre de 2023, la suma \$50.274.814.- más una pensión de \$226.407.

Lo anterior se tiene por cierto, gracias al Ordinario DSGT N°4792-17088 por medio del cual el Instituto de Previsión Social, evacuó el oficio que le fuera ordenado informar por este Tribunal.

**Octavo:** Que, cabe recordar que la discusión planteada en los presentes autos se estructura a partir de las excepciones y defensas opuestas por el Fisco de Chile frente a la pretensión indemnizatoria del actor.

En efecto, el demandante solicita una indemnización de \$200.000.000 por concepto de daño moral, fundada en los graves padecimientos físicos y psicológicos sufridos durante su detención, hechos que no fueron controvertidos por la demandada.

Frente a esta pretensión, el Fisco de Chile ha opuesto como defensa principal la excepción de reparación satisfactiva, sosteniendo que el actor ya ha sido indemnizado a través de diversos beneficios establecidos en las leyes N°19.123, 19.992 y 20.874, los que tendrían un carácter reparatorio integral que impediría una nueva indemnización por los mismos hechos. En subsidio, ha alegado la prescripción extintiva de la acción civil conforme a los artículos 2332 y 2515 del Código Civil, argumentando que las normas



sobre imprescriptibilidad del derecho internacional solo alcanzarían a las acciones penales y no a las civiles.

En consecuencia, la resolución del presente caso requiere pronunciarse sucesivamente sobre: primero, si los beneficios ya recibidos por el actor tienen un carácter excluyente respecto de la indemnización demandada; segundo, la prescriptibilidad de la acción civil derivada de los hechos; y tercero, de rechazarse ambas excepciones, la determinación del monto indemnizatorio, considerando tanto la gravedad de los hechos y sus consecuencias así como las reparaciones ya percibidas y su naturaleza en relación con la acción ejercida.

**I.- En cuanto a la excepción de reparación integral del daño:**

**Noveno:** Que corresponde analizar la excepción de reparación integral opuesta por la demandada, fundada en los beneficios que ha recibido el actor conforme a las leyes 19.123, 19.992 y 20.874, y que según alega, tornarían improcedente la indemnización pretendida en estos autos.

**Décimo:** Que en el contexto histórico de nuestro país entre los años 1973 y 1990, el Estado de Chile implementó diversas políticas y medidas legislativas destinadas a la reparación del daño causado por agentes estatales, materializadas principalmente a través de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley N°19.123, cuyo objeto fundamental fue coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

**Undécimo:** Que, si bien el Estado ha implementado diversas medidas de reparación, materializadas a través de beneficios pecuniarios directos,



prestaciones de salud y acciones de carácter simbólico, estas prestaciones constituyen políticas públicas generales que, si bien atienden ciertos aspectos de la reparación debida, no pueden considerarse como una reparación integral del daño específico sufrido por cada víctima en particular. En efecto, una verdadera reparación integral debe trascender lo meramente patrimonial y considerar la dimensión individual del daño moral causado a cada víctima en concreto.

**Duodécimo:** Que resulta especialmente relevante considerar que las propias leyes invocadas por el Fisco establecen expresamente la compatibilidad de sus beneficios con otras prestaciones. Así, el artículo 24 de la Ley N°19.123 dispone que la pensión de reparación es compatible con otros beneficios que puedan corresponder al respectivo beneficiario, mientras que el artículo 4° de la Ley N°19.992 establece similar compatibilidad respecto de cualquier otra pensión o beneficio de seguridad social.

**Decimotercero:** Que, a su turno, la normativa citada en ningún caso establece una renuncia, prohibición o incompatibilidad con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto resarcir integralmente el daño padecido. Por el contrario, las prestaciones otorgadas por el Estado apuntan a distintas dimensiones del daño causado, incluyendo aspectos patrimoniales como la pérdida de oportunidades, beneficios educacionales y de salud, que no necesariamente abarcan la específica dimensión del daño moral que se reclama en estos autos.

**Decimocuarto:** Que, por consiguiente, y no constando que las prestaciones ya recibidas por el actor supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se ejerce, esta sentenciadora rechazará la excepción de reparación integral opuesta por la demandada.

## **II.- En cuanto a la excepción de prescripción extintiva:**

**Decimoquinto:** Que corresponde pronunciarse sobre la excepción de prescripción opuesta subsidiariamente por la demandada, fundada en el artículo 2332 del Código Civil que establece un plazo de 4 años y, en subsidio, en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal que contempla un término de 5 años.



**Decimosexto:** Que es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, el demandante fue detenido por agentes del Estado hasta en dos oportunidades durante el mes de octubre de 1973, siendo sometido a torturas físicas y psicológicas y estando detenido un total de cinco días.

Tales hechos configuran delitos de lesa humanidad, conforme lo establece la Ley N°20.357 en su artículo 1°, al señalar que "Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias: 2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos."

Esta calificación jurídica se encuentra respaldada por los antecedentes acompañados a folios 1 y 22, de los cuales se desprende que los delitos cometidos el año 1986 respecto del demandante obedecieron a razones y se encuentran vinculados a actos del Estado, estableciendo el artículo 40 de la misma ley que "La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben".

**Decimoséptimo:** Que, en este análisis, por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, rige lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional ratificado por el Estado Chileno y actualmente vigente, que dispone que "Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada".

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en establecer que toda violación a una obligación





internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente mediante la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior, la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral.

**Decimoctavo:** Que si bien nuestro ordenamiento civil contempla normas sobre prescripción que rigen esencialmente para relaciones entre privados, y que conforme al artículo 2497 del Código Civil estas se aplican igualmente a favor y en contra del Estado en cuestiones contractuales y patrimoniales donde predomina el interés privado; tratándose de acciones reparatorias por violaciones a los derechos humanos no resulta procedente su aplicación.

En efecto, por un principio de coherencia jurídica y sobre la base de la vulneración de derechos que estas acciones lesivas han causado, los estatutos internacionales ratificados por Chile conceden un derecho a reparación integral, que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio ocasionado.

Resulta entonces contraproducente aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. Interpretar lo contrario implicaría vulnerar precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana. Disponer lo contrario, además, colisionaría con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir que "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". Este criterio ha sido reconocido de manera



constante por la Excm. Corte Suprema en diversas sentencias (Roles N°8318-2018; N°29944-2019; N°29.617-2019; N°79.259-2020, entre otras).

**Decimonoveno:** Que, por las razones expuestas, se rechazará la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

### **III.- En cuanto al fondo:**

**Vigésimo:** Que la acción deducida por la parte demandante busca obtener el resarcimiento del perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado durante el mes de octubre de 1973, hechos que no fueron controvertidos y que incluyeron detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte, según se estableció en el considerando tercero.

**Vigésimo primero:** Que, para determinar la procedencia y extensión de la indemnización reclamada, resulta necesario analizar la naturaleza y dimensiones del daño moral cuya reparación se persigue en estos autos. Al respecto, conforme a lo planteado por el propio demandante, el perjuicio moral presenta una doble dimensión que debe ser considerada:

Por una parte, el demandante ha expuesto el daño moral que surge directamente de los graves padecimientos sufridos durante su detención, incluyendo tortura física y psicológica, que por su propia naturaleza y gravedad causaron dolor y sufrimiento profundo, afectando su dignidad humana. Como señala el actor, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de vejámenes necesariamente generan un daño moral que es propio de la naturaleza humana, siendo inherente a la gravedad de los hechos padecidos.

Por otra parte, el actor ha alegado y acreditado las consecuencias permanentes que estos hechos han producido en su vida, manifestadas en un daño psicológico persistente caracterizado por un trastorno de estrés postraumático, con múltiples manifestaciones que han afectado significativamente su calidad de vida hasta la actualidad, según se estableció en el considerando séptimo.

**Vigésimo segundo:** Que, en esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que "El que ha cometido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YNEKXRBQUJ

un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito", a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que "Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta".

**Vigésimo tercero:** Que, considerando tanto la gravedad intrínseca de los hechos padecidos como sus secuelas permanentes, y teniendo presente que estas afectaciones han incidido de manera significativa y continua en la vida del actor, a la luz de los antecedentes allegados al proceso, los que permiten fijar un parámetro que, aunque complejo de valorar, refleja la intensidad del sufrimiento padecido frente a los hechos ilícitos ocurridos. Atendido ello, surge indefectiblemente la necesidad de reparar estos perjuicios, indemnización que esta juez cuantifica prudencialmente en la suma de \$36.200.000 (treinta y seis millones doscientos mil pesos).

**Vigésimo cuarto:** Que, en lo relativo a la alegación subsidiaria de la demandada para que se consideren los beneficios que el actor ha recibido conforme a las leyes N°19.123, 19.992 y 20.874 al momento de determinar el monto indemnizatorio, esta debe ser rechazada por los mismos motivos expuestos al desechar la excepción de reparación integral.

Si bien dichas leyes contemplan ciertos beneficios que podrían entenderse como una forma genérica de reparación del daño moral sufrido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que estas prestaciones no consideran la dimensión particular del perjuicio padecido por cada víctima en concreto. En efecto, mientras los beneficios legales buscan resarcir de manera más bien estandarizada algunas de las consecuencias de estos graves hechos, la indemnización del daño moral que aquí se reclama tiene por objeto reparar integralmente el sufrimiento y las secuelas específicas padecidas por el actor, aspectos que escapan a las medidas generales adoptadas por el legislador y que requieren una valoración judicial caso a caso.

**Vigésimo quinto:** Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor entre



la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

**Vigésimo sexto:** Que, sobre la prueba que no ha sido especialmente analizada en estos autos y en lo particular las sentencias tanto de Tribunales nacionales como internacionales relativas a hechos que guardan distintos niveles de similitud con la que es materia de autos, lo cierto es que aquellas no resultan útiles para acreditar ninguna de las circunstancias de hecho discutidas en este juicio ni tampoco vinculan a este Tribunal de forma alguna de cara a decidir la controversia de marras.

**Vigésimo séptimo:** Que, en cuanto a la condena en costas, al no haber resultado totalmente vencida la demandada y conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, cada parte soportará sus costas.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 1700, 1702, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra sobre Derecho de Los Tratados y 144, 170 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se decide que:

**I.-** Se rechaza la excepción de reparación integral opuesta.

**II.-** Se rechaza la excepción de prescripción extintiva opuesta en subsidio.

**III.-** Se acoge la demanda interpuesta a folio 1, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de \$32.600.000 por concepto de daño moral, con reajustes e intereses.

**IV.-** Que cada parte soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

**C-3416-2023**

**Dictada por Angélica del Pilar Cortés Godoy, Jueza Suplente del Décimo Juzgado Civil de Santiago.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YNEKXRBQUJ

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, **veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YNEKXRBQUJ